

Como en el resto de España, el reflejo de la ocupación de las Carolinas no fue distinto en nuestra provincia. La prensa progresista se encargó de fustigar la inoperancia del gobierno de turno, como es el caso de la republicana **«Revista de Albacete»**: *«Los alemanes han ocupado las Carolinas. El Gobierno español no debe consentir este despojo, si bien es verdad que en nuestras manos las Carolinas no valen nada y en manos de los alemanes servirán de algo al comercio y a la Humanidad»*.

Por su parte, los líderes políticos también se encargaron de avivar el descontento popular; en los pueblos albacetenses de mayor población se celebraron mítines y manifestaciones antigermánicas.

El domingo 30 de agosto estaba convocada una manifestación en la ciudad de Albacete, que fue prohibida por el gobernador civil. Al día siguiente la máxima autoridad provincial levantó la prohibición y el vecindario pudo congregarse en la plaza del Altozano, aunque, claro está, con la unánime protesta de los partidos políticos en la oposición que consideraron una falta de respeto grave a las libertades públicas el hecho de tener que contar con la aprobación gubernamental para realizar la concentración. Especialmente provocador fue el mitin celebrado en Hellín a finales de agosto, que contó con la intervención de los oradores, D. Vicente Molina y los masones Antonio Redondo Orriols y Dionisio Fernández Ferrer, que utilizaron como hilo argumental la idea de que Alemania necesitaba las Carolinas como plataforma para hacerse con las islas Filipinas y culpaban al gobierno de Madrid de ciego y consentidor de dicha maniobra. El mitin provocó las iras de los conservadores locales, cuyas protestas terminaron por promover un tumulto que motivó la apertura de causa judicial a los tres oradores citados.

En ese clima de fervor patriótico, por todos los rincones peninsulares se pedía al gobierno conservador, presidido por Cánovas, que interviniera, lo que hizo con fecha 12 de agosto, enviando al Canciller alemán una nota de protesta.

Bismarck contestó proponiendo que el conflicto se resolviera bajo el arbitraje del Papa León XIII, al que España aceptó como mediador. Un albacetense, el Marqués de Molíns, a la sazón embajador en Roma, participó como consultor del Pontífice representando los intereses nacionales y negoció, junto con Solms, el embajador alemán, los derechos y los límites de las tierras que debían considerarse como españolas.